

No. 57827*

**Peru
and
Costa Rica**

Agreement on the transfer of sentenced persons between the Republic of Peru and the Republic of Costa Rica. San José, 14 January 2002

Entry into force: *19 October 2022, in accordance with article XIV(1)*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Peru, 30 June 2023*

**No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**Pérou
et
Costa Rica**

Accord relatif au transfèrement des personnes condamnées entre la République du Pérou et la République du Costa Rica. San José, 14 janvier 2002

Entrée en vigueur : *19 octobre 2022, conformément au paragraphe 1 de l'article XIV*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : *Pérou, 30 juin 2023*

**Aucun numéro de volume n'a encore été attribué à ce dossier. Les textes disponibles qui sont reproduits ci-dessous sont les textes originaux de l'accord ou de l'action tels que soumis pour enregistrement. Par souci de clarté, leurs pages ont été numérotées. Les traductions qui accompagnent ces textes ne sont pas définitives et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL]

CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU

Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA

La República del Perú y la República de Costa Rica, en adelante las Partes;

Deseando, facilitar la rehabilitación social de las personas condenadas, mediante la adopción de métodos adecuados;

Considerando, que deben lograrse estos objetivos dándoles a los nacionales privados de su libertad o en régimen de libertad condicional, como consecuencia de una sentencia penal, la posibilidad de cumplir su condena en su medio social de origen;

Han convenido celebrar el siguiente Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas:

ARTICULO I

DEFINICIONES

A los efectos del presente Convenio:

1. "Sentencia", designará una resolución o fallo final dictado por un órgano judicial con el cual termina el proceso penal y se impone una condena, dictada por sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, no sujeta a posterior impugnación.

2. "Persona Condenada", designará a una persona que cumpla una condena, en los términos previstos en los párrafos 1 y 5.

3. "Estado receptor", designará al Estado al cual la persona condenada puede ser trasladada o lo haya sido ya, con el fin de cumplir su condena.

4. "Estado trasladante", designará al Estado que haya impuesto una condena y del cual la persona condenada pueda ser trasladada o lo haya sido ya.

5. "Condena", designará cualquier pena o medida privativa de la libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital u otra institución en el Estado trasladante, impuesto por un órgano judicial, en razón de un delito o infracción penal.

ARTICULO II

PRINCIPIOS GENERALES

1. Las Partes se obligan, en las condiciones previstas por el presente Convenio a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas.

2. Una persona condenada en el territorio de una Parte, podrá, con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio, ser trasladada a la otra Parte para cumplir la condena que se le haya impuesto. Con tal fin, podrá expresar, bien al Estado trasladante o bien al Estado receptor, su deseo que se le traslade en virtud del presente instrumento internacional.

3. El traslado podrá ser solicitado por el Estado trasladante o por el Estado receptor.

ARTICULO III

CONDICIONES PARA EL TRASLADO

El presente Convenio se aplicará bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.

2. Que la parte de la condena que faltare por cumplir al momento de efectuarse la solicitud sea superior a seis meses.

3. Que la sentencia sea firme o definitiva, esto es, cuando no cabe la posibilidad de recurso legal contra ella en el Estado trasladante y que el término previsto para dicho recurso haya vencido, excepto el recurso de revisión.

4. La persona trasladada no podrá ser nuevamente juzgada en el Estado receptor por los mismos hechos delictivos que motivaron el traslado.

5. Que la persona condenada, o una persona autorizada a actuar en su nombre, cuando por razón de su edad o de su estado físico o mental, una de las Partes así lo estimare necesario, consienta el traslado.

6. Que la persona condenada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado trasladante, de las multas, gastos de justicia, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia condenatoria. Se exceptúa a la persona condenada que pruebe debidamente su absoluta insolvencia.

7. Que el Estado trasladante y el Estado receptor manifiesten expresamente por escrito su anuencia al traslado.

8. Que se haya conmutado por pena de prisión una eventual pena de muerte.
9. Que no exista causa legal alguna que impida la salida del solicitante de traslado o proceso penal pendiente que impida la salida del sancionado.
10. Que el delito atribuible al condenado sea delito tanto en el Estado Trasladante como el Estado Receptor
11. Que el traslado de la persona condenada no significará un agravamiento de su situación judicial y personal.

ARTICULO IV

OBLIGACION DE FACILITAR INFORMACIONES

1. Los Estados Partes se comprometen a poner el presente Convenio en conocimiento de cualquier persona condenada a quien pudiera aplicársele.

2. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado trasladante su deseo de ser trasladada en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá informar de ello al Estado receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia quede firme.

3. Las informaciones comprenderán:

- a) El nombre y apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada.
- b) En su caso, su dirección en el Estado receptor.
- c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena.
- d) La naturaleza, duración y fecha de inicio de la condena.
- e) copia certificada de la sentencia, y
- f) Cualquier otra información que el Estado receptor pueda requerir para permitirle considerar la posibilidad de traslado, así como para informar a la persona condenada y al Estado trasladante de las consecuencias del traslado para la persona condenada según su ley.

4. Si la persona condenada hubiera expresado al Estado receptor su deseo de ser trasladada, éste solicitará al Estado trasladante realizar las gestiones correspondientes a tal efecto, incluyendo las informaciones a que se refiere el numeral 3 que antecede.

5. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado trasladante o el Estado receptor en aplicación de los numerales precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados respecto a una petición de traslado.

ARTICULO V

SOLICITUD DE TRASLADO

1. Cada traslado de personas costarricenses condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República de Costa Rica en la República del Perú al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Cada traslado de personas peruanas condenadas se iniciará mediante una petición hecha por escrito y presentada por la Embajada de la República del Perú en la República de Costa Rica al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el cual la trasladará a la instancia correspondiente.

3. Si el Estado trasladante considera conveniente la petición de traslado de la persona condenada y expresa su consentimiento, éste lo comunicará a la brevedad posible al Estado receptor, de modo que una vez que se hayan completado los trámites internos se pueda efectuar el traslado.

4. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado trasladante a las del Estado receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona condenada y de su transporte a partir del lugar convenido de recibo de ésta. La entrega constará en un acta levantada al efecto.

5. Para tomar la decisión relativa al traslado de una persona condenada y de conformidad con el objeto que el traslado contribuya positivamente a su rehabilitación social, la autoridad de cada una de las Partes considerará, entre otros factores, la gravedad del delito y las posibles vinculaciones del autor con el crimen organizado, su estado de salud y los vínculos que pueda tener con la sociedad del Estado trasladante como con el Estado receptor.

6. Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de una persona condenada, notificará su decisión sin demora a la otra Parte, pudiendo expresar la causa o motivo de la denegatoria.

7. Negada la autorización del traslado, el Estado receptor no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado trasladante podrá revisar su decisión a instancia del Estado receptor cuando este alegare circunstancias excepcionales.

8. Antes de efectuarse el traslado, el Estado trasladante brindará al Estado receptor, si éste lo solicita, la oportunidad de verificar, mediante un funcionario designado por vía diplomática por el Estado receptor de acuerdo a sus leyes, que el consentimiento de la

persona condenada ha sido dado de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las consecuencias legales inherentes al mismo.

9. Los gastos ocasionados con motivo del traslado, correrán a cargo del Estado trasladante hasta el lugar de entrega, sin embargo, éste podrá gestionar que la persona condenada devuelva la totalidad o parte de los gastos de traslado.

ARTICULO VI

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

1. El Estado receptor, a petición del Estado trasladante, facilitará a este último los siguientes documentos:

- a) Una copia de las disposiciones legales de las cuales resulte que los actos u omisiones, que han dado lugar a la condena en el Estado trasladante, constituyen un delito o infracción penal en su territorio.
- b) Información aproximada acerca de como se cumplirá la condena en dicho Estado receptor, especialmente referida a la modalidad y duración.

2. Si se solicitare un traslado y este fuera aceptado por ambos Estados, el Estado trasladante deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se expresan:

- a) Una copia de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas.
- b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena.
- c) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado a que se refiere el numeral 5 del artículo III, otorgada ante la autoridad consular competente.
- d) Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca de la persona condenada, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado receptor.

3. Si el Estado receptor considera que los informes suministrados por el Estado trasladante no son suficientes para permitirle la aplicación del presente Convenio, podrá solicitar información complementaria dentro de un plazo razonable no mayor de tres meses.

4. Los documentos que se entreguen de Estado a Estado, en aplicación del presente Acuerdo, serán eximidos de las formalidades de legalización.

ARTICULO VII

INFORMACION ACERCA DEL CUMPLIMIENTO

El Estado receptor facilitará información al Estado trasladante acerca del cumplimiento de la condena:

- a) Cuando se haya cumplido la condena;
- b) Si la persona condenada se evadiere; o
- c) Si el Estado trasladante le solicitare un informe especial.

ARTICULO VIII

JURISDICCION

El Estado trasladante mantendrá jurisdicción sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. Tendrá asimismo la facultad de indultar o conceder amnistía o clemencia a la persona condenada. El Estado receptor al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

ARTICULO IX

CUMPLIMIENTO DE LA PENA

1. La ejecución de la pena de la persona condenada trasladada se realizará de acuerdo a las normas del régimen penitenciario del Estado receptor. En ningún caso podrá éste modificar por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad impuesta por el Estado trasladante.

2. Ninguna condena será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá del término de prisión impuesto por la sentencia del tribunal del Estado trasladante.

3. Si un nacional de una parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte, bajo el régimen de condena condicional, anticipada o vigilada, u otro beneficio penitenciario, podrá cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado receptor.

4. La autoridad judicial del Estado trasladante solicitará las medidas de vigilancia que interesen, mediante exhorto que se diligenciará por la vía diplomática.

5. Para los efectos del presente artículo, la autoridad judicial del Estado receptor podrá adoptar las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al Estado Trasladante sobre la forma en que se llevan a cabo y en su caso le comunicará de inmediato el incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido.

6. Para la aplicación del presente Convenio, las Partes por medio de Notas Diplomáticas se comunicarán en el momento oportuno la designación de la Autoridad Central responsable.

ARTICULO X

MENOR BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL.

El presente Tratado se aplicará a menores bajo tratamiento especial conforme a las leyes de las Partes. La ejecución de la medida privativa de libertad que se aplique a tales menores de edad se cumplirá de acuerdo con las leyes del Estado receptor. Para el traslado se deberá obtener el consentimiento expreso del representante legal del menor.

ARTICULO XI

FACILIDADES DE TRANSITO

1. Si cualquiera de las Partes celebrara un Convenio para el traslado de personas condenadas con un tercer Estado, la otra Parte deberá colaborar facilitando el tránsito por su territorio, de las personas condenadas en virtud de dicho Convenio.

2. El Estado que tenga intención de efectuar tal traslado, deberá dar aviso previo de ésta a la otra Parte.

ARTICULO XII

APLICACION TEMPORAL

El presente Convenio podrá aplicarse también al cumplimiento de condenas dictadas antes de su entrada en vigor, siempre que con ello se favorezca a la persona condenada.

ARTICULO XIII

PROSECUCION DEL CUMPLIMIENTO

Con el objeto de cumplir con los propósitos del presente Convenio, cada una de las Partes adoptará las medidas legislativas necesarias y establecerá los procedimientos administrativos adecuados para que la sentencia con pena privativa de libertad y medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por el Estado trasladante tengan efecto legal en el Estado receptor.

ARTICULO XIV

VIGENCIA DEL CONVENIO

1. El presente Convenio quedará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los 30 días a partir de la fecha del intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.

2. Este Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante notificación escrita a través de la vía diplomática. La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días después de haberse efectuado dicha notificación.

En fe de lo cual los infrascritos, firman el presente Convenio.

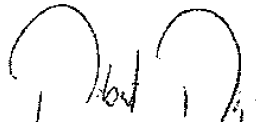
Hecho en San José, el catorce de enero del año dos mil dos, en dos ejemplares originales, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República del Perú



Diego García-Sayán Larrabure
Ministro de Relaciones Exteriores

Por la República de Costa Rica



Roberto Rojas López
Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto

[TRANSLATION – TRADUCTION]

AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE
REPUBLIC OF PERU AND THE REPUBLIC OF COSTA RICA

The Republic of Peru and the Republic of Costa Rica, hereinafter referred to as the Parties;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons, through the adoption of appropriate methods,

Considering that those objectives should be achieved by granting nationals deprived of their liberty or on probation as the result of a criminal judgment the opportunity to serve their sentences in their social environment of origin;

Have agreed to conclude this Agreement on the transfer of sentenced persons.

Article I Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. “Judgment” means a ruling or final determination rendered by a judicial body which terminates criminal proceedings and imposes a sentence established by a consensual or final judgment, that is, not subject to further appeal.
2. “Sentenced person” means a person serving a sentence as provided in paragraphs 1 and 5.
3. “Receiving State” means a State to which a sentenced person may be transferred or has been transferred, for the purpose of serving his or her sentence.
4. “Transferring State” means the State that has imposed a sentence and from which a sentenced person may be transferred or has already been transferred.
5. “Sentence” means any punishment or custodial measure for a crime or criminal offence imposed by a judicial body to be served in a penal establishment, hospital or other institution in the transferring State.

Article II General principles

1. The Parties undertake, in accordance with the provisions of this Agreement, to afford each other the widest possible measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. A person sentenced in the territory of one Party may be transferred to the other Party, in accordance with the provisions of this Agreement, in order to serve the sentence imposed. To that end, he or she may express to the transferring State or to the receiving State his or her desire to be transferred under this international instrument.
3. The transfer may be requested by the transferring State or the receiving State.

Article III Conditions for the transfer

This Agreement shall apply under the following conditions:

1. If the sentenced person is a national of the receiving State.
2. If at the time the request for transfer is made there are at least six months of the sentence remaining.
3. If the judgment is final or definitive, that is, it is not pending legal appeal in the sentencing State or the deadline provided for such appeal has expired, except for an appeal for judicial review;
4. The transferred person may not be tried again in the receiving State for the same criminal acts that motivated the transfer.
5. If the transfer is consented to by the sentenced person or, when in view of his or her age or his or her physical or mental condition, one of the Parties considers it necessary, by a person authorized to act on his or her behalf.
6. If the sentenced person has paid or guaranteed, to the satisfaction of the transferring State, payment of fines, trial costs, civil reparation and pecuniary judgments of all kinds for which he or she is responsible in accordance with the provisions of the judgment. Sentenced persons who can adequately prove their absolute insolvency are exempt in this regard.
7. If the transferring State and the receiving State expressly indicate, in writing, their agreement with the transfer.
8. If, in the event of the imposition of a death sentence, it has been commuted to imprisonment.
9. If the departure of the sanctioned person requesting the transfer is not prevented by any legal cause or by pending criminal proceedings.
10. If the offence committed by the sentenced person is a crime in both the transferring State and the receiving State.
11. If the transfer of the convicted person will not worsen his or her judicial and personal situation.

Article IV Obligation to provide information

1. The States Parties undertake to bring this Agreement to the attention of any sentenced person to whom it might be applied.
2. If the sentenced person has expressed his or her desire to the transferring State in being transferred under this Agreement, that State shall so inform the receiving State as soon as practicable after the judgment becomes final.
3. The information shall include:
 - (a) The name, date and place of birth of the sentenced person;
 - (b) His or her address, if any, in the receiving State;
 - (c) A statement of the facts on the basis of which the sentence was imposed;
 - (d) The nature, duration and date of commencement of the sentence;
 - (e) A certified copy of the judgment; and
 - (f) Any other information that the receiving State might require to enable it to consider the possibility of transfer and to inform the sentenced person and the transferring State of the consequences of the transfer for the sentenced person under its law.

4. If the sentenced person has expressed an interest to the receiving State in being transferred, that State shall request the transferring State to take the appropriate action, including the provision of the information referred to in paragraph 3 above.

5. A sentenced person shall be informed in writing of any steps taken by the transferring State or the receiving State in accordance with the previous paragraphs or any decision taken by either Party with respect to a request for transfer.

Article V Request for transfer

1. Every transfer of sentenced Costa Rican persons shall be initiated by a written request submitted by the Embassy of the Republic of Costa Rica in the Republic of Peru to the Ministry of Foreign Affairs.

2. Every transfer of sentenced Peruvian persons shall be initiated by a written request submitted by the Embassy of the Republic of Peru in the Republic of Costa Rica to the Ministry of Foreign Affairs and Worship, which shall transmit it to the appropriate agency.

3. If the transferring State considers the sentenced person's request for transfer to have merit, and gives its consent, it shall communicate to the receiving State its approval of the request as rapidly as possible, so that once the internal procedures have been completed, the transfer may take place.

4. The sentenced person shall be handed over by the authorities of the transferring State to the authorities of the receiving State in the place agreed upon by both Parties. The receiving State shall be responsible for the custody of the sentenced person and his or her transport from the place agreed as the location of arrival of that person. The transfer shall be recorded in an official document drawn up for that purpose.

5. In taking the decision on the transfer of a sentenced person and in accordance with the purpose of the transfer, namely to contribute positively to his or her social rehabilitation, the authority of each Party shall consider, among other factors, the gravity of the offence and the perpetrator's possible links to organized crime, his or her state of health and any social ties that he or she might have in the transferring State and the receiving State.

6. When either Party does not approve the transfer of a sentenced person, it shall promptly inform the other Party of its decision, and may express the cause or grounds for refusal.

7. After refusal of authorization to transfer, the receiving State may not make a new request, but the transferring State may review its decision at the request of the receiving State should it claim that there are exceptional circumstances.

8. Before transfer is effected, the transferring State shall afford an opportunity to the receiving State, if it so requests, to verify through an official appointed through the diplomatic channel by the receiving State in accordance with its laws, that the consent of the sentenced person has been expressed voluntarily and with full knowledge of the legal consequences inherent therein.

9. The costs associated with the transfer shall be borne by the transferring State up to the place of handover; however, the latter may arrange for the sentenced person to reimburse all or part of the transfer costs.

Article VI Supporting documents

1. At the request of the transferring State, the receiving State shall provide that State with the following documents:

- (a) A copy of the laws which provide that the acts or omissions that gave rise to the conviction in the transferring State constitute a crime or criminal offence in its territory;
- (b) Approximate information concerning the way in which the sentence will be served in the receiving State, especially with regard to modality and duration.

2. If a transfer is requested and accepted by both States, the transferring State shall provide the receiving State with the following documents:

- (a) A copy of the judgment and the legal provisions that were applied;
- (b) An indication of how much of the sentence has already been served, including information relating to any pre-trial detention, reduction of sentence, or any other circumstance having a bearing upon the serving of the sentence.
- (c) A declaration containing the consent to the transfer as referred to in paragraph 5 of article III made before the competent consular authority;
- (d) As necessary, any medical or social report concerning the sentenced person, any information on his or her treatment in the transferring State and any recommendation about future treatment in the receiving State.

3. If the receiving State considers that the reports furnished by the transferring State are not sufficient to enable it to implement this Agreement, it may request the submission of additional information within a reasonable time not to exceed three months.

4. Any documents furnished by one State to the other under this Agreement shall be exempt from legalization requirements.

Article VII Information on enforcement

The receiving State shall provide information to the transferring State concerning the enforcement of the sentence:

- (a) When the sentence has been completed;
- (b) If the sentenced person has escaped; or
- (c) If the transferring State requests a special report from the receiving State.

Article VIII Jurisdiction

The transferring State shall retain jurisdiction with respect to the imposed sentence or any other procedure providing for review or modification of sentences by its judicial bodies. It shall also retain the power to grant pardon, amnesty or mercy to the sentenced person. The receiving State, upon receiving notice of any decision in this regard, shall promptly take the corresponding measures, in accordance with its legislation on the matter.

Article IX Enforcement of the sentence

1. The serving of a sentence by a sentenced person who has been transferred shall be enforced in accordance with the rules of the prison system of the receiving State. In no case may the receiving State alter the nature or duration of a custodial sentence imposed by the transferring State.

2. No sentence shall be enforced by the receiving State in such a way as to increase the length of custody beyond the prison term provided for in the sentence imposed by the court of the transferring State.

3. If a national of one Party is serving a sentence imposed by the other Party on conditional early or supervised release or some other form of adjusted sentence, he or she may serve such sentence under the supervision of the receiving State.

4. The judicial authority of the transferring State shall request the supervisory measures of its concern through letters rogatory that will be processed through the diplomatic channel.

5. For the purposes of this article, the judicial authority of the receiving State may take the requested supervisory measures and shall keep the transferring State informed of how the measures are implemented, and where necessary shall inform the transferring State immediately of failure by the sentenced person to comply with the obligations assumed.

6. For the implementation of this Agreement, the Parties shall communicate to each other in due course the designation of the responsible Central Authority by means of Diplomatic Notes.

Article X Minors subject to special treatment

This Agreement shall apply to minors subject to special treatment in accordance with the laws of the Parties. Any custodial security measures applied to such minors shall be executed in accordance with the laws of the receiving State. The express consent of the legal representative of the minor must be obtained for the transfer.

Article XI Transit facilities

1. If either Party enters into an agreement for the transfer of sentenced persons with a third State, the other Party shall cooperate by facilitating transit through its territory of sentenced persons under that agreement.

2. The State intending to effect such a transfer shall give advance notice thereof to the other Party.

Article XII Temporal application

This Agreement may also be applied to the enforcement of sentences imposed before its entry into force, provided that such application favours the sentenced person.

Article XIII Continued enforcement

In order to achieve the purposes of this Agreement, each Party shall take the necessary legislative measures and establish the adequate administrative procedures to ensure that custodial sentences and security measures that restrict liberty imposed by the transferring State have legal effect in the receiving State.

Article XIV Validity of the Agreement

1. This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force 30 days after the exchange of the respective ratification instruments.

2. This Agreement shall be of unlimited duration. Either Party may terminate it by giving notice in writing through the diplomatic channel. The termination shall take effect 180 days after such notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned have signed this Agreement.

DONE at San José on 14 January 2002, in two original copies in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Republic of Peru:

DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE

Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Costa Rica:

ROBERTO ROJAS LÓPEZ

Minister for Foreign for Affairs and Worship

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD RELATIF AU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU ET LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA

La République du Pérou et la République du Costa Rica, ci-après dénommées les « Parties »,
Désireuses de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées par l'adoption de
méthodes appropriées,

Estimant que ces objectifs devraient être réalisés en donnant aux ressortissants qui sont privés
de liberté ou en liberté surveillée à la suite d'un jugement rendu en matière pénale la possibilité de
purger leur peine dans leur milieu social d'origine,

Sont convenues de conclure le présent Accord relatif au transfèrement des personnes
condamnées.

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme « jugement » désigne la décision ou le jugement sans appel rendu par un organe
judiciaire mettant fin à une procédure pénale et imposant une condamnation déterminée de façon
consensuelle ou imposée dans le cadre d'un jugement définitif sans appel.

2. Le terme « personne condamnée » désigne une personne purgeant une peine
conformément aux paragraphes 1 et 5.

3. Le terme « État d'accueil » désigne l'État vers lequel la personne condamnée peut être,
ou a été, transférée pour y purger sa peine.

4. Le terme « État transférant » désigne l'État dans lequel la condamnation a été prononcée
et à partir duquel une personne condamnée peut être transférée ou l'a été.

5. Le terme « condamnation » désigne toute sanction ou mesure de détention imposée par
un organe judiciaire en raison d'un crime ou d'une infraction pénale, à purger dans un
établissement pénitentiaire, un hôpital ou une autre institution de l'État transférant.

Article II. Principes généraux

1. Les Parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent Accord, à coopérer le
plus étroitement possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut être transférée dans l'autre
Partie, conformément aux dispositions du présent Accord, afin d'y purger la peine prononcée. À
cette fin, elle peut exprimer à l'État transférant ou à l'État d'accueil sa volonté d'être transférée en
vertu du présent instrument international.

3. Le transfèrement peut être demandé par l'État transférant ou l'État d'accueil.

Article III. Conditions du transfèrement

Le présent Accord s'applique dans les conditions suivantes :

1. Si la personne condamnée est un ressortissant de l'État d'accueil.
2. Si, au moment où la demande de transfèrement est présentée, il reste au moins six mois de la peine à purger.
3. Si le jugement est final ou définitif, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'objet d'aucun recours juridique dans l'État ayant prononcé la condamnation ou que tout délai de recours a expiré, à l'exception du recours en révision.
4. La personne transférée ne peut être rejugée dans l'État d'accueil pour les mêmes actes criminels qui ont motivé le transfèrement.
5. Si la personne condamnée ou, lorsque l'une des deux Parties l'estime nécessaire en raison de l'âge ou de l'état physique ou mental de celle-ci, une personne habilitée à agir en son nom a consenti au transfèrement.
6. Si la personne condamnée a payé les amendes, les frais de justice, les réparations civiles et les sanctions pécuniaires de toute nature dont elle est responsable conformément aux dispositions du jugement, ou en a garanti le paiement entier, à la satisfaction de l'État transférant. Les personnes condamnées qui peuvent prouver de manière adéquate leur insolvabilité absolue sont exemptées de cette condition.
7. Si l'État transférant et l'État d'accueil indiquent expressément par écrit leur accord quant au transfèrement.
8. Si, en cas de condamnation à mort, celle-ci a été commuée en peine d'emprisonnement.
9. Si le départ de la personne condamnée qui demande le transfèrement n'est pas empêché par une cause légale ou par une procédure pénale en cours.
10. Si l'infraction commise par la personne condamnée constitue un crime à la fois dans l'État transférant et dans l'État d'accueil.
11. Si le transfèrement de la personne condamnée n'aggrave pas sa situation judiciaire et personnelle.

Article IV. Obligation de fournir des renseignements

1. Les États Parties s'engagent à porter le présent Accord à l'attention de toute personne condamnée à laquelle il pourrait s'appliquer.
2. Si la personne condamnée a exprimé à l'État transférant sa volonté d'être transférée en vertu du présent Accord, ledit État en informe l'État d'accueil le plus tôt possible après que le jugement est devenu définitif.
3. Les renseignements à fournir comprennent :
 - a) le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
 - b) le cas échéant, son adresse dans l'État d'accueil ;
 - c) un exposé des faits ayant entraîné la condamnation ;
 - d) la nature, la durée et la date de début de la condamnation ;
 - e) une copie certifiée conforme du jugement ;
 - f) tout autre renseignement dont l'État d'accueil pourrait avoir besoin pour envisager la possibilité d'un transfèrement, ainsi que pour informer la personne condamnée et

l'État transférant des conséquences du transfèrement pour la personne condamnée en vertu de sa législation.

4. Si la personne condamnée fait part à l'État d'accueil de sa volonté d'être transférée, ledit État d'accueil demande à l'État transférant de prendre les mesures appropriées, notamment en fournissant les renseignements visés au paragraphe 3 ci-dessus.

5. La personne condamnée est informée par écrit de toute démarche entreprise par l'État transférant ou l'État d'accueil conformément aux paragraphes précédents et de toute décision prise par l'un ou l'autre des États concernant une demande de transfèrement.

Article V. Demande de transfèrement

1. Tout transfèrement de personnes costaricaines condamnées est introduit par une demande écrite présentée au Ministère des affaires étrangères par l'ambassade de la République du Costa Rica en République du Pérou.

2. Tout transfèrement de personnes péruviennes condamnées est introduit par une demande écrite présentée par l'ambassade de la République du Pérou en République du Costa Rica au Ministère des affaires étrangères et des cultes, qui est tenu de la transmettre à l'autorité compétente.

3. Si l'État transférant juge fondée la demande de transfèrement de la personne condamnée et donne son accord, il communique dans les plus brefs délais à l'État d'accueil son approbation de la demande, de sorte que le transfèrement puisse avoir lieu après l'accomplissement des procédures internes.

4. La personne condamnée est remise par les autorités de l'État transférant aux autorités de l'État d'accueil en un lieu convenu par les deux Parties. L'État d'accueil est responsable de la détention de la personne condamnée et de son transport depuis le lieu convenu comme point d'arrivée de ladite personne. Le transfert est consigné dans un document officiel établi à cette fin.

5. Pour décider de transférer une personne condamnée, conformément à l'objectif du transfèrement, à savoir de contribuer positivement à la réinsertion sociale de la personne condamnée, les autorités de chaque Partie prennent en considération, entre autres facteurs, la gravité de l'infraction et les liens éventuels de l'auteur avec la criminalité organisée, ainsi que son état de santé et ses liens sociaux éventuels dans l'État transférant et dans l'État d'accueil.

6. Lorsque l'une des Parties n'approuve pas le transfèrement d'une personne condamnée, elle informe rapidement l'autre Partie de sa décision et peut indiquer la raison ou les motifs de son refus.

7. Après un refus de l'autorisation de transfèrement, l'État d'accueil ne peut pas effectuer de nouvelle demande, mais l'État transférant peut revoir sa décision à la demande de l'État d'accueil si ce dernier invoque l'existence de circonstances exceptionnelles.

8. Avant que le transfèrement ne soit effectué, l'État transférant donne à l'État d'accueil, si ce dernier le demande, la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un fonctionnaire désigné par la voie diplomatique par l'État d'accueil conformément à sa législation, que la personne condamnée a exprimé son consentement de façon volontaire et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

9. Les coûts liés au transfèrement sont pris en charge par l'État transférant jusqu'au lieu de remise ; toutefois, ledit État peut exiger que la personne condamnée rembourse tout ou partie des frais de transfèrement.

Article VI. Documents justificatifs

1. À la demande de l'État transférant, l'État d'accueil fournit à ce dernier les documents suivants :

- a) une copie des dispositions légales précisant que les actes ou omissions à l'origine de la condamnation dans l'État transférant constituent un crime ou une infraction pénale sur son territoire ;
- b) des renseignements généraux sur la manière dont la peine sera purgée dans l'État d'accueil, notamment en ce qui concerne les modalités et la durée.

2. Si le transfèrement est demandé et accepté par les deux États, l'État transférant fournit à l'État d'accueil les documents suivants :

- a) une copie du jugement et des dispositions légales qui ont été appliquées ;
- b) une indication de la durée de la peine déjà purgée, y compris des renseignements concernant toute détention provisoire ou remise de peine ou toute autre circonstance ayant une incidence sur l'exécution de la condamnation ;
- c) une déclaration contenant le consentement au transfèrement tel que visé au paragraphe 5 de l'article 3, faite devant l'autorité consulaire compétente ;
- d) le cas échéant, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, tout renseignement sur son traitement dans l'État transférant et toute recommandation relative à son traitement futur dans l'État d'accueil.

3. Si l'État d'accueil estime que les rapports fournis par l'État transférant ne sont pas suffisants pour lui permettre d'appliquer le présent Accord, il peut demander la fourniture de renseignements supplémentaires dans un délai raisonnable ne dépassant pas trois mois.

4. Tout document fourni par un État à l'autre au titre du présent Accord est exempté des exigences de légalisation.

Article VII. Informations relatives à l'exécution

L'État d'accueil fournit des renseignements à l'État transférant concernant l'exécution de la condamnation :

- a) lorsque la condamnation a été exécutée dans sa totalité ;
- b) si la personne condamnée s'est évadée ;
- c) si l'État transférant demande un rapport spécial à l'État d'accueil.

Article VIII. Compétence

L'État transférant conserve la compétence juridictionnelle à l'égard de la condamnation infligée ou de toute autre procédure prévoyant la révision ou la modification des condamnations par ses organes judiciaires. Il conserve également le pouvoir d'accorder la grâce, l'amnistie ou la

clémence à la personne condamnée. L'État d'accueil, dès qu'il est informé de toute décision à cet égard, prend sans délai les mesures correspondantes, conformément à sa législation en la matière.

Article IX. Exécution de la condamnation

1. L'exécution d'une condamnation par une personne condamnée qui a été transférée est assurée conformément aux règles du régime pénitentiaire de l'État d'accueil. L'État d'accueil ne peut en aucun cas modifier la nature ou la durée d'une peine privative de liberté prononcée par l'État transférant.

2. Aucune condamnation n'est appliquée par l'État d'accueil de manière à prolonger la durée de détention au-delà de la durée d'emprisonnement prévue dans la condamnation imposée par le tribunal de l'État transférant.

3. Si un ressortissant de l'une des Parties exécute une condamnation infligée par l'autre Partie avec une libération conditionnelle anticipée, sous surveillance ou toute autre forme de peine aménagée, ledit ressortissant peut exécuter cette condamnation sous la surveillance de l'État d'accueil.

4. L'autorité judiciaire de l'État transférant demande les mesures de surveillance qu'elle désire par des commissions rogatoires qui sont traitées par la voie diplomatique.

5. Aux fins du présent article, l'autorité judiciaire de l'État d'accueil peut prendre les mesures de surveillance demandées, tient informé l'État transférant de la manière dont ces mesures sont mises en œuvre et, le cas échéant, notifie immédiatement l'État transférant de tout manquement de la personne condamnée à ses obligations.

6. Aux fins de l'application du présent Accord, les Parties s'informent en temps utile de la désignation de l'autorité centrale responsable au moyen de notes diplomatiques.

Article X. Mineurs soumis à un traitement spécial

Le présent Accord s'applique aux mineurs faisant l'objet d'un traitement spécial conformément à la législation des Parties. Toute mesure de sûreté privative de liberté appliquée à ces mineurs doit être exécutée conformément à la législation de l'État d'accueil. Le consentement exprès du représentant juridique du mineur doit être obtenu pour le transfèrement.

Article XI. Facilités de transit

1. Si l'une des Parties conclut un accord relatif au transfèrement des personnes condamnées avec un État tiers, l'autre Partie coopère en facilitant le transit des personnes condamnées par son territoire dans le cadre dudit accord.

2. L'État ayant l'intention de réaliser ledit transfèrement en notifie préalablement l'autre Partie.

Article XII. Application temporelle

Le présent Accord peut également être appliqué à l'exécution des peines imposées avant son entrée en vigueur, à condition que cette application soit à l'avantage de la personne condamnée.

Article XIII. Poursuite de l'exécution

Afin de réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie prend les mesures législatives nécessaires et établit les procédures administratives adéquates pour garantir que les peines privatives de liberté et les mesures de sûreté restrictives de liberté imposées par l'État transférant ont un effet juridique dans l'État d'accueil.

Article XIV. Validité de l'Accord

1. Le présent Accord est soumis à ratification et entre en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification entre les Parties.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer moyennant un préavis écrit notifié à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent Accord.

FAIT à San José, le 14 janvier 2002, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la République du Pérou :
DIEGO GARCÍA-SAYÁN LARRABURE
Ministre des affaires étrangères

Pour la République du Costa Rica :
ROBERTO ROJAS LÓPEZ
Ministre des affaires étrangères et du culte